12ma ASAMBLEA LEGISLATIVA 5ta SESIÓN ORDINARIA

LEY Núm. 73

(Aprobada en 30 de junio de 1995

(P. del S. 1171)

LEY

Para enmendar el Artículo 1, la Declaración de Política Pública y los Artículos 4, 5 y 6 de la Ley Núm. 9 de 18 de agosto de 1933, según enmendada por la Ley 10 de 29 de octubre de 1975, a los fines de establecer cuál será la política pública en relación a la exploración y explotación de los minerales metálicos y prohibir la explotación de los recursos minerales metálicos mediante las técnicas de "cielo abierto" ("open pit") o de "minería de descortezamiento" ("strip mining").

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley Núm. 9 de 18 de agosto de 1933, según enmendada, conocida como la "Ley de Minas de Puerto Rico" fue creada con el propósito de explotar y utilizar los recursos minerales de Puerto Rico para beneficio del pueblo puertorriqueño. La misma establecía que para la realización de la explotación de minerales, era necesaria la planificación cuidadosa que garantizara el desarrollo integral y permanente del país. Establecía, de igual modo, que dicha explotación debería ser compatible con la conservación de los demás recursos naturales.

Desde el Siglo XIX se ha planteado en Puerto Rico la posibilidad de explorar y explotar nuestros recursos mineros. Los intentos han surgido desde que se aprobó el 6 de julio de 1859 la Ley de Minas Española. El intento resurgió en el 1933 y se concedió y reglamentó el arrendamiento minero. Así también surgieron esfuerzos al respecto en 1954, 1959, 1963, 1969 y en 1975.

Desde el comienzo mismo de la discusión pública en torno a este asunto, los partidos políticos se han manifestado al respecto. Durante la década de 1960, cuando se discutía la posibilidad de explotar los yacimientos cupríferos de Utuado-Adjuntas, el Programa de Gobierno del Partido Popular Democrático señalaba que había que explotar los yacimientos, el Partido Independentista lo aceptaba, pero únicamente bajo la condición política de independencia y el Partido Nuevo Progresista lo aceptaba sólo si se lograba preservar los recursos naturales. El esfuerzo por explotar entonces los yacimientos del área de Adjuntas-Utuado se descarrilaron principalmente por razones de naturaleza económica.

En 5 de octubre de 1992, la administración saliente otorgó un permiso de exploración para los yacimientos en el sector Cala Abajo que comprende parte del área que se consideró en la década de 1960. Debido a que la Ley de Minas así lo obliga, tanto el tenedor del permiso cumpla con todos los requisitos de ley, el Secretario de Recursos Naturales y ambientales renovó los mismos en los años subsiguientes.

De consumarse el proyecto, la extracción de cobre y oro se realizaría utilizando el método de cielo abierto dado que la concentración de cobre exige que se remueva material terrestre en proporción mayor de 100 a 1. Como consecuencia, las comunidades aledañas se verían

impactadas por el ruido de las detonaciones, además de por el polvo fugitivo que, aunque existen técnicas para su control, requerirían de una supervisión independiente constante que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales confiesa no tener la capacidad de proveer. A ello habría que añadir el riesgo mayor que representa el que los sistemas de contención de agua pudieran fallar en algún momento.

Al evaluar el sistema de extracción de cielo abierto concluimos que, dada las particularidades geográficas, topográficas y demográficas de Puerto Rico, éste es un método que no debiera utilizarse en nuestra la Isla para la extracción de metales.

Dado el hecho de que esta controversia renace con cada generación, es menester que la Asamblea Legislativa manifieste, de una vez y por todas, su oposición a la utilización de este método de extracción, máxime si consideramos que los beneficios económicos para el Pueblo puertorriqueño no son mayores ni significativos. En este respecto, la propuesta dispone para unos gastos totales anuales en Puerto Rico de treinta millones de dólares incluyendo impuestos locales, regalías, salarios y beneficios relacionados, bienes y servicios, y gastos de capital de preproducción.

Cuando existen actividades económicas esenciales, como la generación de energía eléctrica o la disposición de desperdicios, hay ocasiones en que el gobierno tiene la obligación de desarrollarlas, no empece la natural oposición que suscita sus inconvenientes. Sin embargo, cuando se trata de una actividad económica opcional, en un sistema democrático, no se puede desatender el clamor de un pueblo cuando la oposición tenaz de los residentes del área que comprende el proyecto, es evidentemente militante y unánime.

Entendemos, sin embargo, que la sociedad no puede renunciar a toda futura consideración de posibilidad de aprovechamiento en el caso de la explotación de yacimientos mineros que pudieran hacerse viables en otras partes del país mediante el uso de otras tecnologías. Disponer que no se podrá extraer metales de ningún yacimiento actual o que se identifique en el futuro, sería una evidente sobrereacción. Lo que sí es posible determinar es que las tecnologías de cielo abierto y de descortezamiento para la extracción de metales resulta inaceptable.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Se añade una oración al final del tercer párrafo del Artículo 1 de la Ley Núm. 9 de 18 de agosto de 1933 que leerá como sigue:

"No obstante lo anterior, se prohíbe la extracción de minerales metálicos mediante las técnicas de "cielo abierto" ("open pit") o de minería por descortezamiento ("strip minning") o cualquier método que altere significativamente las características naturales existentes en la zona minera."

Artículo 2.- Se enmienda el inciso (c) del Artículo 4 de la Ley Núm. 9 de 18 de agosto de 1933, según enmendada, de la siguiente manera:

"(a) .....

(b) .....

(c) Expedirá permisos de exploración debiendo advertir a los beneficiarios de los mismos que, si se tratara de exploraciones para la minería de metales, no se podrá utilizar en la extracción los métodos de "cielo abierto" ("open pit") o de "minería de descortezamiento" ("strip mining")."

Artículo 3.- Se añade un apartado p al Artículo 4 de la Ley Núm. 9 de 18 de agosto de 1933, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 4.- Deberes y Facultades del Secretario del Departamento de Recursos Naturales.

(a) ...

(p) El Secretario no concederá permisos de explotación de minerales metálicos, si la tecnología a utilizarse fuera la de "cielo abierto" ("open pit") o de "minería para descortezamiento" ("strip mining").

Artículo 4.- Se añade una última oración al sub-inciso 3 del inciso (A) del Artículo 5 de la Ley Núm. 9 de 18 de agosto de 1933, según enmendada, para que se lea como sigue:

"En el caso de permisos para la exploración de minerales metálicos se advertirá que no se podrá utilizar en la extracción los métodos de "cielo abierto" ("open pit") o de "minería de descortezamiento" ("strip mining")."

Artículo 5.- Se enmienda el inciso (b) del Artículo 6 de la Ley Núm. 9 de 18 de agosto de 1933, según enmendada, de la siguiente manera:

"(a) .....

(b) Término y Condiciones de los Arrendamientos.-

(1) Naturaleza del arrendamiento.- El arrendamiento concede el derecho de extraer y subsiguientemente poseer y disponer del mineral sujeto a las disposiciones de este Capítulo, mediante el pago de una regalía y de los derechos de participación que dispone este Capítulo. Este arrendamiento no es transferible excepto con el consentimiento del Secretario de Recursos Naturales. El mineral sólo podrá extraerse del suelo incluido verticalmente

dentro de las colindancias demarcadas en el arrendamiento. No se otorgarán contratos de arrendamiento cuando el método de minería de metales sea de "cielo abierto" ("open pit") o de "minería por descortezamiento" ("strip mining")."

Artículo 6.- Vigencia

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

.....
Presidente de la Cámara

.....
Presidente del Senado

Departamento de Estado

CERTIFICO: que es copia fiel y exacta del original aprobado y firmado por el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el día 30 de junio de 1995.

Secretario Auxiliar de Estado
de Puerto Rico

LEGISLATURE OF PUERTO RICO

Office of Legislative Services

September 13, 1995

Teresa Medina-Monteserín, Director of the Office of Legislative Services of the Legislature of Puerto Rico, hereby certifies to the Secretary of State that she has duly compared the English and Spanish texts of Act No. 73 (S.B. 1171) of the 5th Session of the 12th Legislature of the Commonwealth of Puerto Rico, entitled:

AN ACT to amend Section 1, the Declaration of Public Policy and Sections 4, 5 and 6 of Act No. 9 of August 18, 1933, as amended by Act No. 10 of October 29, 1975, in order to establish the public policy to be followed regarding the prospection and exploitation of metallic minerals and to prohibit the exploitation of metallic mineral resources through open pit and strip mining technique,

and finds the same are complete, true and correct versions of each other.

Teresa Medina Monteserín

Teresa Medina-Monteserín

P.O. BOX 3986, SAN JUAN, PUERTO RICO 00902-3986 • TELS. (809) 723-5021 / 723-4112 / FAX (809) 724-2428

(S. B. 1171)

(No. 73)

(Approved June 30, 1995)

AN ACT

To amend Section 1, the Declaration of Public Policy and Sections 4, 5 and 6 of Act No. 9 of August 18, 1933, as amended by Act No. 10 of October 29, 1975, in order to establish the public policy to be followed regarding the prospection and exploitation of metallic minerals and to prohibit the exploitation of metallic mineral resources through open pit and strip mining techniques.

STATEMENT OF MOTIVES

Act No. 9 of August 18, 1993, as amended, known as the "Mining Act of Puerto Rico" was created for the purpose of exploiting and using the mineral resources of Puerto Rico for the benefit of the Puerto Rican people. This Act states that in order to exploit minerals, careful planning is necessary to guarantee the integral and permanent development of the country. It likewise establishes that said exploitation must be compatible with the conservation of all other natural resources.

Since the 19th century, the possibility of prospecting and exploiting our mineral resources has been suggested in Puerto Rico. Attempts to do so have been made since the Spanish Mining Law was approved on July 6, 1859. Attempts were again made in 1933 when mining leases were granted and regulated. In that regard, further efforts were also undertaken in 1954, 1959, 1963, 1969 and in 1975.

Since this matter was first publicly discussed, political parties have expressed their opinion on the subject. During the 60's, when the possibility of exploiting the cupriferous deposits in Utuado-Adjuntas was discussed, the Government Program of the Popular Democratic Party pointed out that the deposits had to be exploited; the Independence Party accepted this, but only under the political status of independence, and the New Progressive Party accepted it only if the preservation of natural resources

was assured. The efforts to exploit the deposits in the Adjuntas-Utuado area at that time were dismissed mainly for economic reasons.

On October 5, 1992, the outgoing administration granted a prospection permit for the deposits in the Cala Abajo sector which comprises part of the area considered in the 60's. Because the Mining Act specifically makes it compulsory, provided the permit holder complies with all the requirements of law, the Secretary of Natural and Environmental Resources renewed the same in subsequent years.

Should the project be carried out, the extraction of copper and gold would be performed using the open pit method since the concentration of copper requires the removal of soil in a proportion greater than 100 to 1. As a consequence, the neighboring communities would suffer the impact of the noise of the detonations, as well as the pervasion of the runaway dust that, in spite of the existing techniques for their control, require the constant independent supervision that the Department of Natural and Environmental Resources confesses not to have the capacity to provide. To all this we must add the great risk created by the possibility that the water contention systems might fail at some point.

On evaluating the open pit extraction system we concluded that given the particular geographic, topographic and demographic characteristics of Puerto Rico, this is a method which should not be used in our Island for the extraction of metals.

Due to the fact that this controversy arises with each generation, it is essential that the Legislature makes manifest, once and for all, its opposition to the use of this method of extraction, most of all if we take into consideration that the economic benefits for the Puerto Rican people are neither extraordinary nor significant. In this respect, the proposal provides for total annual expenses in Puerto Rico of thirty million dollars including local taxes, royalties, salaries and related benefits, goods and services and preproduction capital expenses.

When essential economic activities are involved, such as electric power generation or waste disposal, there are times when the government has the obligation to develop them, regardless of the normal opposition caused by the inconveniences these create. However, when dealing with an optional economic activity, in a democratic system we

cannot ignore the outcries of the people when the tenacious opposition of the residents of the area involved in the project is evidently militant and unanimous.

We understand, however, that society cannot disregard future consideration of the possible advantage of taking up the exploitation of mineral deposits that could be feasible in other parts of the Island through the use of other technologies. To provide for minerals not to be extracted from any current deposit or from one to be identified in the future, would be an evident overreaction. What is indeed possible to determine is that open pit and strip mining techniques for the extraction of metals are totally unacceptable.

BE IT ENACTED BY THE LEGISLATURE OF PUERTO RICO:

Section 1.- A sentence is hereby added at the end of the third paragraph of Section 1 of Act No. 9 of August 18, 1933, to read as follows:

"Notwithstanding the preceding, the extraction of metallic minerals using open pit or strip mining techniques or any other method that significantly alters the natural characteristics existing in the mining zone is hereby prohibitted".

Section 2.- Subsection (c) of Section 4 of Act No. 9 of August 18, 1933, as amended, is hereby amended to read as follows:

"(a).....

(b).....

(c) Shall issue prospection permits upon duly notifying the beneficiaries thereof that if prospecting for the mining of minerals is to be carried out, "open pit" or "strip mining" extraction methods shall not be used."

Section 3.- A clause p is hereby added to Section 4 of Act No. 9 of August 18, 1933, as amended, is hereby amended to read as follows:

"Section 4.- Duties and Powers of the Secretary of the Department of Natural Resources.

(a) ...

(p) The secretary shall not grant metallic mineral prospection permits if "open pit" or "strip mining" technology is to be used."

Section 4.- A last sentence is hereby added to clause 3 of subsection (A) of Section 5 of Act No. 9 of August 18, 1933, as amended, to read as follows:

"(a).....

(b) Lease Terms and Conditions.-

(1) Nature of the lease.- The lease grants the right to extract and subsequently to own and dispose of the mineral subject to the provisions of this Chapter, upon payment of a royalty and of the share fees provided herein. Such a lease is untransferable except with the consent of the Secretary of Natural Resources. The mineral shall only be extracted from the ground included vertically within the boundaries marked off in the lease. No lease contracts shall be granted when the "open pit" and "strip mining" methods for mining minerals are to be used."

Section 6.- Effectiveness

This Act shall take effect immediately after its approval.